

Configuración del delito de secuestro

I. Quedó acreditado que la menor se encontró privada de su libertad por la acción desplegada por el procesado, y que duró breve tiempo (de cuatro a cinco minutos); empero, conforme a lo expuesto, el periodo de tiempo no es cuantificable para su configuración. El criterio de temporalidad mínimo, en el caso concreto, no es una premisa que deba cumplirse, sino que basta con que aquel se haya producido con tal fin.

II. No hay acoplamiento normativo por medio de un juicio de imputación de los hechos con las exigencias típicas de este delito, es decir, que el fáctico, conforme fue expuesto, no configura el delito de coacción, toda vez que no se determinó que la menor haya sido constreñida u obligada a desplegar una conducta positiva o haya sido impedida de hacer lo que la norma no ordena.

III. Por el contrario, se llegó a determinar la existencia del delito de secuestro, por cuanto el procesado privó de su libertad a la menor sin motivo alguno; lo cual evidencia su conducta dolosa.

IV. La Sala Superior atribuyó una estructura típica que no se corresponde con la comprensión normativa del modo en que acontecieron los hechos por lo que el recurso de casación promovido debe ser declarado fundado y, por ende, corresponde, actuando en sede de instancia y dada la infracción de precepto material, casar la sentencia de vista por la causal 3 del artículo 429 del Código Procesal Penal, y confirmar la sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Sala Penal Permanente

Casación n.º 788-2021/Lima Norte

Lima, siete de febrero de dos mil veintitrés

VISTOS: el recurso de casación interpuesto por la representante del **MINISTERIO PÚBLICO** contra la sentencia de vista, del treinta de diciembre de dos mil veinte (foja 63 del cuaderno de apelación), emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima

Norte, que revocó la sentencia de primera instancia, del doce de marzo de dos mil veinte (foja 120 del cuaderno de debate), en el extremo en que condenó a **Hernán Cosme Ubaldo Cárdenas** como autor del delito de secuestro agravado, en perjuicio de L. V. T.¹, a veinticinco años de pena privativa de libertad y fijó la reparación civil en la suma de S/ 5000 (cinco mil soles), a favor de la agraviada; y, reformándola, recondujo la imputación al tipo penal de coacción, previsto en el artículo 151 del Código Penal; en consecuencia, lo condenó como autor del delito de coacción a doce meses de pena privativa de libertad efectiva, pena que dio por cumplida y fijó la reparación civil en la suma de S/ 3000 (tres mil soles); con lo demás que contiene.

Intervino como ponente el señor juez supremo LUJÁN TÚPEZ.

FUNDAMENTOS DE HECHO

§ I. Procedimiento en primera instancia

Primero. La señora fiscal provincial, mediante requerimiento (foja 4 del cuaderno de debates), formuló acusación contra HERNÁN COSME UBALDO CÁRDENAS como autor del delito de secuestro *agravado*, en perjuicio de la menor L. V. T., solicitando que se le imponga cadena perpetua y que se fije como reparación civil la suma de S/ 10 000 (diez mil soles) a favor de la referida menor. Posteriormente, se dictó el auto de

¹ Entre las disposiciones que contiene la Ley número 27115, se establece la reserva de la identidad de la víctima en los procesos penales bajo responsabilidad del magistrado a cargo del proceso. Esta disposición supone que se utilizarán sus iniciales para identificar a la parte agraviada con el delito.

enjuiciamiento del seis de febrero de dos mil veinte (foja 25 del cuaderno de debates), en los mismos términos de la acusación fiscal.

Segundo. Llevado a cabo el juzgamiento, el Juzgado Penal Colegiado, mediante sentencia del doce de marzo de dos mil veinte (foja 120 del cuaderno de debate), condenó a HERNÁN COSME UBALDO CÁRDENAS, como autor del delito de secuestro *agravado* —tipificado en el primer párrafo del artículo 152 del Código Penal, concordante con el inciso 1 del último párrafo del mismo artículo—, en agravio de la menor L. V. T., a veinticinco años de pena privativa de libertad, y fijó por concepto de reparación civil, la suma de S/ 5000 (cinco mil soles) a favor de la citada agraviada.

Tercero. Contra la mencionada sentencia, el procesado HERNÁN COSME UBALDO CÁRDENAS interpuso recurso de apelación (foja 145 del cuaderno de debate). Dicha impugnación fue concedida por auto del trece de junio de dos mil veinte (foja 154 del cuaderno de debate). Se dispuso elevar los actuados al superior jerárquico.

§ II. Procedimiento en segunda instancia

Cuarto. En la audiencia de apelación solo se examinó al procesado, también se dio cuenta de que la defensa del procesado no realizó el ofrecimiento de medios probatorios. Seguidamente, se expusieron los alegatos finales de los sujetos procesales concernidos, según emerge del acta del dieciséis de diciembre de dos mil veinte (foja 56 del cuaderno de apelación). En ese contexto, el Tribunal Superior, a través de la sentencia de vista, del treinta de diciembre de dos mil veinte (foja 63 del cuaderno de apelación), revocó la sentencia de primera

instancia, del doce de marzo de dos mil veinte (foja 120 del cuaderno de debate), que condenó a HERNÁN COSME UBALDO CÁRDENAS como autor del delito de secuestro agravado, en perjuicio de L. V. T., a veinticinco años de pena privativa de libertad y fijó la reparación civil en la suma de S/ 5000 (cinco mil soles), a favor de la agraviada; y, *reformándola*, condujo la imputación al tipo penal de coacción, previsto en el artículo 151 del Código Penal; en consecuencia, lo condenó como autor del delito de coacción a doce meses de pena privativa de libertad efectiva (ordenó su excarcelación por el tiempo de detención sufrido desde el tres de junio de dos mil diecinueve) y fijó la suma de S/ 3000 (tres mil soles) por concepto de reparación civil a favor de la agraviada; con lo demás que contiene.

Quinto. Frente a la sentencia de vista acotada, la representante del Ministerio Público promovió recurso de casación (foja 76 del cuaderno de apelación). Mediante auto del diecinueve de enero de dos mil veintiuno (foja 86 del cuaderno de apelación), la citada impugnación fue concedida. El expediente judicial fue remitido a esta sede suprema.

§ III. Procedimiento en la instancia suprema

Sexto. La Sala Penal Transitoria, al amparo del artículo 430, numeral 5, del Código Procesal Penal, corrió traslado del recurso (foja 44 del cuadernillo supremo). Posteriormente, emitió el decreto del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno (foja 52 del cuadernillo supremo), para la redistribución de la causa, al amparo de la Resolución Administrativa n.º 000378-2021-CE-PJ (foja 48 del cuadernillo supremo), y una vez cumplida, la Sala Penal Permanente, con decreto del

diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno (foja 53 del cuadernillo supremo), se avocó al conocimiento de la presente causa para que se prosiga con el trámite; en consecuencia, mediante decreto del treinta de mayo de dos mil veintidós (foja 58 del cuadernillo supremo), reprogramó fecha para la calificación del recurso de casación, por lo que se emitió el auto de calificación del trece de junio de dos mil veintidós (foja 60 del cuadernillo supremo), por el que declaró bien concedido el recurso de casación. Posteriormente, mediante decreto del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós (foja 68 del cuadernillo supremo), se dispuso señalar fecha de audiencia el veinticinco de enero del presente año.

Séptimo. Realizada la audiencia de casación, se celebró inmediatamente la deliberación de la causa en sesión privada. Efectuada la votación respectiva y por unanimidad, corresponde dictar la presente sentencia casatoria, cuya lectura se programó en la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El tópico que amerita pronunciamiento se encuentra delimitado en el fundamento cuarto de la calificación del recurso de casación que señala:

Teniendo en cuenta que el delito de secuestro tiene como bien jurídico la libertad personal, comprendida como la capacidad de toda persona de desplazarse de un lugar a otro, cuyo periodo de restricción no es cuantificable para determinar la configuración del tipo penal, resulta necesario analizar si se configura la errónea interpretación del tipo penal,

pues el *ad quem* concluyó que no se configura el ilícito de secuestro, sino el de coacción, ya que la privación de la libertad de la menor agraviada fue por breves momentos y que el procesado la habría realizado de modo circunstancial, bajo el efecto del alcohol.

El motivo casacional es el previsto en el numeral 3 del artículo 429 del Código Procesal Penal, es decir: “Si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la Ley penal o de otras jurídicas necesarias para su aplicación”.

Segundo. Ahora bien, a fin de evaluar la casación sustantiva, es preciso ceñirse escrupulosamente a los hechos probados por los órganos jurisdiccionales sentenciadores².

Tercero. Los hechos probados son que el tres de junio de dos mil diecinueve, aproximadamente a las 21:00 horas, cuando la menor agraviada L. V. T. de 13 (trece) años de edad se encontraba transitando sola por el asentamiento humano Los Olivos de Pro, Los Olivos, con destino a su domicilio, el procesado HERNÁN COSME UBALDO CÁRDENAS la jaló del brazo, la hizo ingresar al interior del inmueble ubicado en la manzana H2, lote 03, del referido asentamiento humano, y la amenazó con un cuchillo alrededor del cuello diciéndole que cesara sus gritos para que la soltara. Luego el encausado colocó el cuchillo en la mesa y se dirigió hacia el interior del inmueble por unos minutos; situación que aprovechó la menor

² SALA PENAL PERMANENTE, primer considerando del fundamento de derecho de la Sentencia de Casación n.º 305-2021/Lambayeque, del veintitrés de junio de dos mil veintidós.

para descerrar el seguro de la puerta y huir del inmueble donde se encontraba privada de su libertad.

Cuarto. La indebida o errónea interpretación del artículo 152 del Código Penal, así como la subsunción jurídica de los hechos, pasa por determinar si estos configuran el ilícito de secuestro o el de coacción.

Quinto. Al respecto, el artículo 152 del Código Penal, vigente al tiempo de los hechos señala: “El que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad”.

Sexto. La estructura normativa del delito de secuestro, desarrollada en el apartado 3.2 del fundamento tercero de la Casación n.º 1438-2018/La Libertad³, permite expresar las siguientes premisas:

- a. Es un delito común, que puede ser cometido por cualquier persona y se realiza al margen del ejercicio de toda función pública en que concurren razones particulares del autor. Es posible su comisión por un funcionario o servidor público siempre que actúe al margen de la ley y por razones personales ajenas a su ejercicio funcional y/o al interés público.
- b. Su comisión únicamente se produce a título doloso, y ello demandará constatar en el agente una especial intencionalidad personal dirigida hacia la privación o restricción de la libertad ambulatoria del agraviado.
- c. Protege la libertad personal, comprendida como la capacidad de toda persona para desplazarse de un lugar a otro sin restricción alguna y conforme a su voluntad, sin importar las alteraciones o adicciones que

³ SALA PENAL PERMANENTE, del treinta de octubre de dos mil diecinueve.

padezca para justificar su restricción, dado que el respeto a la dignidad humana subyace a cualquier consideración personal o institucional.

d. El derecho, motivo o facultad al que se refiere el tipo penal permite prever que existen supuestos en los que se produciría la configuración típica objetiva de secuestro; empero, ella estaría justificada por el ejercicio de las mencionadas prerrogativas, que deben estar previamente reconocidas en una norma positivizada. Ello habilitará las bases necesarias para determinar cuándo una conducta se cometió a título personal o bajo alcances justificados normativamente en el mismo tipo.

e. El periodo de restricción no es cuantificable a efectos de determinar la configuración típica; por ello, no serán amparables las alegaciones que minimicen tiempos para alegar atipicidad o lapsos prolongados para aseverar mayor reproche de antijuridicidad respecto a la conducta básica.

f. La carencia de móvil, propósito, modalidad o circunstancia por la que el agraviado ha sido privado de su libertad debe ser comprendida junto con las facultades mencionadas inicialmente, esto es, que la persona que restringe la libertad de otra, además de no tener derecho, motivo o facultad, actúa sin un propósito razonable a las condiciones descritas y ello permitirá diferenciar el afán o propósito criminal de secuestro, en función de las causas de la resolución criminal que determinaron al agente delictivo a obrar en un modo específico en desmedro de la libertad de otra persona.

Conforme lo expuesto, quedó acreditado que la menor se encontró privada de su libertad por la acción desplegada por el procesado, que duró breve tiempo (de cuatro a cinco minutos); empero, conforme a lo expuesto, el periodo de tiempo no es cuantificable para su configuración. El criterio de temporalidad mínimo, en el caso concreto, no es una premisa que deba cumplirse, sino que basta con que aquel se haya producido con tal fin.

Séptimo. Así, lo señalado por el *ad quem*, referido a que la “privación de la libertad de la menor agraviada fue por breves momentos y que el procesado la

habría realizado de modo circunstancial, bajo el efecto del alcohol”, no se ajusta a los criterios esgrimidos para verificar que el suceso se encuadra en el supuesto normativo desarrollado; en efecto, el razonamiento expuesto está reñido con los presupuestos válidos que configuran el ilícito atribuido de secuestro. De igual modo, el criterio de temporalidad al que se acude, aunado a que este se habría realizado de modo circunstancial y bajo los efectos del alcohol, importa la trasgresión de la norma sustantiva.

Octavo. Además de la privación de la libertad que sufrió la menor víctima, que no se analiza adecuadamente, el *ad quem* obvia analizar los hechos circundantes para la configuración del ilícito, que estriban en el uso de un arma blanca que usó el procesado para lograr su finalidad. De otro lado, también cabe considerar que el Colegiado Superior señala que el procesado se encontraba bajo los efectos del alcohol, extremo sobre el cual la menor señaló que se encontraba con aliento alcohólico, pero esto no resulta suficiente para determinar que la conducta del procesado se desplegó sin el pleno uso de sus facultades.

Noveno. Ahora bien, la Sala Superior señaló que el hecho, conforme se tiene probado, en realidad se configura en el tipo penal de coacción, previsto en el artículo 151 del Código Penal, que señala: “el que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe”.

Décimo. La característica típica más resaltante del delito de coacción se configura al imponer a la persona una voluntad externa

para lograr conseguir finalidades no previstas ni deseadas por este. Esta imposición debe ser fruto de la violencia y la amenaza, sin cuya presencia no emerge este tipo penal⁴.

Decimoprimer. Así, según lo expuesto, no hay acoplamiento normativo por medio de un juicio de imputación de los hechos con las exigencias típicas de este delito, es decir, que el fáctico conforme el cual fue expuesto no configura el delito de coacción, toda vez que no se determinó que la menor haya sido constreñida u obligada a desplegar una conducta positiva o haya sido impedida de hacer lo que la norma no ordena.

Decimosegundo. Por el contrario, se llegó a determinar la existencia del delito de secuestro, por cuanto el procesado privó de su libertad a la menor sin motivo alguno; ello evidencia su conducta dolosa.

Decimotercero. En ese sentido, la Sala Superior atribuyó una estructura típica que no se corresponde con la comprensión normativa del modo en que acontecieron los hechos por lo que el recurso de casación promovido debe ser declarado fundado y, por ende, corresponde, actuando en sede de instancia y dada la infracción de precepto material, casar la sentencia de vista por la causal 3 del artículo 429 del Código Procesal Penal, y confirmar la sentencia de primera instancia.

⁴ SALA PENAL PERMANENTE, literal ii) del apartado 4.4, del ordinal IV, del Recurso de Nulidad n.º 272-2016 Lima Sur, del once de noviembre de dos mil dieciséis.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos que integran la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

- I. DECLARARON FUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la representante del **Ministerio Público** contra la sentencia de vista, del treinta de diciembre de dos mil veinte (foja 63 del cuaderno de apelación), emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que revocó la sentencia de primera instancia, del doce de marzo de dos mil veinte (foja 120 del cuaderno de debate), en el extremo en que condenó a Hernán Cosme Ubaldo Cárdenas como autor del delito de secuestro agravado, en perjuicio de L. V. T., a veinticinco años de pena privativa de libertad y fijó la reparación civil en la suma de S/ 5000 (cinco mil soles), a favor de la agraviada; y, reformándola, recondujo la imputación al tipo penal de coacción, previsto en el artículo 151 del Código Penal; en consecuencia, lo condenó como autor del delito de coacción a doce meses de pena privativa de libertad efectiva y fijó en la suma de S/ 3000 (tres mil soles) la reparación civil; con lo demás que contiene; en consecuencia, **CASARON** la sentencia de vista recurrida y, actuando en sede de instancia, **CONFIRMARON** la sentencia de primera instancia, en el extremo en que condenó a **Hernán Cosme Ubaldo Cárdenas** como autor del delito de secuestro agravado, en perjuicio de L. V. T., a veinticinco años de pena privativa de libertad; y, dado que el imputado fue

excarcelado, **DISPUSIERON** que el Juzgado Colegiado emita las órdenes de captura a nivel nacional e internacional del procesado **Hernán Cosme Ubaldo Cárdenas** por el delito de secuestro agravado, en perjuicio de L. V. T.; y, una vez cumplido, realice el cómputo de la sanción que debe cumplir el referido encausado en el establecimiento penal que disponga la autoridad competente.

II. ORDENARON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública y que, acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas en la instancia, incluso a las no recurrentes; y los devolvieron.

S. S.

SAN MARTÍN CASTRO

LUJÁN TÚPEZ

ALTABÁS KAJATT

SEQUEIROS VARGAS

CARBAJAL CHÁVEZ

LT/jj